

## SESIONES ORDINARIAS

### 2004

# ORDEN DEL DIA N° 1180

#### COMISION DE LEGISLACION GENERAL

Impreso el día: 27 de septiembre de 2004

Término del artículo 113: 6 de octubre de 2004

SUMARIO: **Ley 3.088**, sobre Código Rural para los Territorios Nacionales. Derogación. **Savron y otros**. (3.353-D.-2003.)

#### Dictamen de comisión

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley de la señora diputada Savron y otros señores diputados, sobre la derogación de la ley 3.088, de Código Rural para los Territorios Nacionales; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su sanción.

Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2004.

*Jorge L. Montoya. – Aída F. Maldonado.  
– Juan J. Alvarez. – Luis F. J. Cigogna.  
– Roberto I. Lix Klett. – Alberto J. Beccani. – Angel E. Baltuzzi. – Pascual Cappelleri. – María L. Chaya. – Guillermo E. Johnson. – José G. L'Huillier. – María S. Leonelli. – Juliana I. Marino. – Silvia V. Martínez. – Alicia E. Tate. – Jorge R. Vanossi.*

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1° – Derógase la ley 3.088 (Código Rural para los Territorios Nacionales).

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Haydé T. Savron. – Liliana A. Bayonzo. – Cecilia Lugo de González Cabañas. – Héctor R. Romero.*

#### INFORME

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Legislación General al considerar el proyecto de ley de la señora diputada Savron y otros señores diputados, sobre la derogación de la ley 3.088, de Código Rural para los Territorios Nacionales, cree innecesario abundar en más detalles que los expuestos en los fundamentos que lo acompañan por lo que los hace suyos y así lo expresa.

*Jorge L. Montoya.*

#### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Nuestra misión como legisladores se centra en crear leyes necesarias y adecuadas para un determinado contexto social. Ahora bien, nuestro cometido también abarca mantener la coherencia del sistema normativo en el que se insertará la nueva norma creada.

La técnica legislativa aparece como la disciplina que determina las reglas para la construcción del andamiaje legal donde descansan todas las instituciones creadas conforme a derecho.

Esta técnica específica aporta invaluable conocimientos y metodologías para “armar” los conceptos internos de las normas; para “ensamblar” sus partes con el propio orden del que forma parte; para “integrar” sus elementos funcionales con aquellas otras normas que fundan, desarrollan, integran o reconstruyen una norma en especial; y, además, entre otras muchas más funciones, para “dar” unidad, coherencia, sentido de pertenencia, adecuación semántica y caracterización de la norma jurídica.

Muchas veces esta disciplina no se ve respetada por el mismo autor legal, quien es el primero que la debe acatar estrictamente, ya que si bien el legislador tiene por misión dictar normas en base a determinado contexto político, debe hacerlo tomando en cuenta el contexto normativo-técnico-legal de dicha regla creada.

Esto trae como consecuencia situaciones complejas como es el caso de “la proliferación de normas y su dispersión” o lo que comúnmente se denomina en técnica legislativa “inflación normativa”.

Esta circunstancia se agrava por una desprolija actuación del legislador que modifica o deroga normas en forma implícita y genérica o mantiene vigente normas que han caído en desuetudo; ello produce el actual caos normativo reinante, además de inseguridad jurídica para el legislado, al no poder determinar con claridad las normas que se encuentran vigentes.

Debemos destacar que esta incertidumbre no sólo se da en el plano legislativo, sino en toda la administración pública, ya que muchas veces quien debe aplicar y hacer cumplir las normas se encuentra, en no pocas ocasiones, ante la duda de su vigencia o frente a disposiciones contradictorias y, en otras oportunidades, ante preceptos que han caído en desuso por haberlos superado una nueva y distinta realidad, esta situación se extiende a los administrados, quienes no pueden determinar sus derechos y obligaciones.

Recordemos que a raíz de la importancia del tema que nos ocupa, se sanciona la ley 24.967 que pone en el tapete la necesidad de fijar principios y procedimientos para contar con un régimen organizado, coherente y consolidado de leyes nacionales generales vigentes y sus reglamentaciones, a través de la elaboración y aprobación del digesto jurídico argentino, designando para ello una comisión de juristas destacados.

Es así que el espíritu del presente proyecto tiende a servir de modelo para que se proceda con respeto a la sistematización jurídica y como un aporte más por nosotros los legisladores a la buena técnica legislativa y la coherencia del ordenamiento en general, mediante (y en este caso puntual) la derogación de una ley que carece de aplicabilidad actual y que si bien ha caído en desuetudo (recordemos que este término viene a caracterizar la costumbre *contra legem* que se genera en contra de lo que establece la ley, y por tanto “intenta” derogarla), sería de “buena práctica y técnica legislativa” derogarla expresamente dado que se da una situación en la que la propia sociedad ha dejado de utilizar una norma legal, aunque la misma se encuentre técnicamente vigente.

Cabe hacernos el siguiente interrogante: ¿es correcto que esta norma que expresa en su artículo 1° “desde el primero de octubre del corriente año, entrará en vigencia el Código Rural para los Territorios Nacionales, redactado por el doctor Víctor M. Molina, con las modificaciones introducidas por la Comisión de Códigos de la Honorable Cámara de Diputados...” se encuentre vigente, cuando el último territorio nacional en la República Argentina se provincializó en el año 1990 por la ley 23.775?

Queda claro que el tiempo ha tomado a la ley 3.088 de 1894 inútil, inservible y obsoleta.

Por otra parte pensamos que con la derogación propuesta en el presente proyecto de ley no se producirá un vacío legislativo ya que según las disposiciones de nuestra Carta Magna, modificada en el año 1994, crear un código rural nacional sería eminememente inconstitucional por no cuadrar dentro de las facultades delegadas que las provincias otorgan a la Nación. En efecto, el artículo 75, inciso 12, sólo admite expresamente como facultades del Congreso Nacional el dictado de los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones.

De más está decir que existen hoy en día provincias que ya cuentan con sus códigos rurales propios aplicables en las jurisdicciones respectivas (Buenos Aires, Chaco, Córdoba, etcétera).

Para finalizar sintetizamos que rige en el país un enorme universo regulatorio, expresado mediante leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, ordenanzas, circulares, comunicaciones o instrucciones, que a mayor abundamiento suelen contradecirse. En el orden jurídico argentino, el Estado se debilita día a día como consecuencia de esta “desprolijidad normativa” el “deber ser” que impone el derecho regulatorio se dispersa en su aplicación y cambian con mucha frecuencia las premisas que integran el juicio normativo.

El infierno en la tierra argentina se asemeja a un camino hacia la inexistencia estatal y a la proliferación bituminosa de reglas jurídicas, que exponen a los individuos a un sinnúmero de contingencias inseguras y traumáticas.

Entonces, una de las principales prerrogativas de nosotros como legisladores es bregar por el derecho como “técnica social”, esto es, establecer y promulgar normas que establezcan criterios de medida de carácter general, obligatorio y coactivo, de manera tal que cada uno sepa que se debe entender como justo e injusto, bueno o malo, ajeno o propio teniendo en cuenta un proceso de desarrollo del

ordenamiento normativo como conjunto de conducta y de organización que constituyen una unidad, con el fin inmediato de reglamentar las relaciones fundamentales de una sociedad solvente en sus lineamientos jurídicos aplicables.

Por las razones mencionadas es que solicito a mis pares el debido apoyo al presente proyecto de ley.

*Haydée T. Savron. – Liliana A. Bayonzo. –  
Cecilia Lugo de González Cabañas. –  
Héctor R. Romero.*